

**Consejo de Seguridad**

Distr. general  
22 de diciembre de 2005  
Español  
Original: inglés

---

**Carta de fecha 20 de diciembre de 2005 dirigida al Presidente  
del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios interino  
de la Misión Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas**

Tengo el honor de transmitir adjuntos a la presente un comunicado de prensa emitido por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática Federal de Etiopía (véase el anexo) y la decisión de la Comisión de Reclamaciones entre Eritrea y Etiopía de fecha 19 de diciembre de 2005 sobre la reclamación de *jus ad bellum* formulada por Etiopía, en que se considera a Eritrea responsable de la guerra librada contra Etiopía en 1998-2000 y se presenta a ese país como el agresor.

Le agradecería que tuviera a bien distribuir el texto de la presente carta y de su anexo a todos los miembros del Consejo de Seguridad y publicarlo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Embajador Teruneh Zenna  
Encargado de Negocios interino



**Anexo de la carta de fecha 20 de diciembre de 2005 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas**

**Un tribunal internacional considera a Eritrea responsable de la guerra librada contra Etiopía en 1998-2000 y presenta a ese país como el agresor**

En su decisión (véase el apéndice) dada a conocer ayer, 19 de diciembre de 2005, la Comisión de Reclamaciones entre Eritrea y Etiopía indicó que Eritrea era responsable de iniciar la guerra de dos años de duración contra Etiopía. La Comisión también consideró a Eritrea responsable de matar, golpear y secuestrar intencionalmente a civiles etíopes y del saqueo y la destrucción generalizados de bienes civiles durante los ataques y la ocupación del territorio etíope en regiones fronterizas, llevados a cabo por Eritrea. Aunque la Comisión no falló a favor de Etiopía en todos los casos, esa decisión es de una importancia enorme, pues presenta a Eritrea como el agresor y pone al descubierto el carácter beligerante del régimen en el estancamiento actual del proceso de paz.

Al hallar a Eritrea culpable del estallido de la crisis entre los dos países en 1998, la Comisión afirmó que Eritrea había violado el derecho internacional cuando atacó a Etiopía sin que mediara provocación y ocupó Badme y otras zonas indefensas de Etiopía en mayo de 1998. En el párrafo 16 de la decisión, al emitir su determinación decisiva respecto de la parte que inició la guerra y que, por consiguiente, era responsable del derramamiento de sangre provocado entre los dos países, la Comisión indicó:

**... la Comisión mantiene que Eritrea violó el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas al recurrir a la fuerza armada para atacar y ocupar Badme, que en ese momento estaba bajo la administración pacífica de Etiopía, así como otro territorio en las weredas (distritos) de Tahtay Adiabo y Laelay Adiabo de Etiopía, en un ataque que se inició el 12 de mayo de 1998, y es responsable de indemnizar a Etiopía por los daños causados por esa violación del derecho internacional.**

La Comisión fue muy específica en lo referente al inicio de la incursión ilegal de Eritrea y la composición de las tropas eritreas que emprendieron ese ataque no provocado. Al referirse a la forma en que comenzó el asalto inicial no provocado de Eritrea a Etiopía, la Comisión señaló:

**Las pruebas mostraron que, cerca de las 5.30 horas del 12 de mayo de 1998, fuerzas armadas eritreas, integradas por al menos dos brigadas de soldados regulares y apoyadas por tanques y artillería, atacaron la ciudad de Badme y otras zonas fronterizas en la Wereda de Tahtay Adiabo en Etiopía, así como al menos otros dos lugares en la Wereda vecina de Laelay Adiabo. Ese día y en los días siguientes, fuerzas armadas eritreas avanzaron por la llanura de Badme hasta ocupar posiciones en terrenos más elevados al este.**

En el momento del ataque, Etiopía no tenía tropas en la zona, confiada en que los dos pueblos fraternales no serían una amenaza recíproca. Así lo confirma la Comisión al afirmar que “el peso de las pruebas indicó que los defensores etíopes estaban constituidos únicamente por milicianos y algunos policías, que pronto se vieron forzados a retirarse ante las fuerzas invasoras eritreas”.

La Comisión fue categórica al descartar todos los argumentos de Eritrea para justificar su acto ilegítimo del 12 de mayo de 1998. “En vista de que no hubo un ataque armado contra Eritrea”, afirma la Comisión en el mismo párrafo, “el ataque que se inició el 12 de mayo no puede justificarse como legítima defensa conforme a la Carta de las Naciones Unidas”.

Debe recordarse que el Gobierno de Eritrea siempre ha argumentado, como lo hizo ante la Comisión de Reclamaciones, que Etiopía, por conducto de su Parlamento, había declarado la guerra a Eritrea el 13 de mayo de 1998. De esta manera, Eritrea malinterpretaba deliberadamente la resolución aprobada por el Parlamento de Etiopía. La Comisión no se dejó engañar por Eritrea en su intento por justificar su agresión. En el párrafo 17 de la decisión, la Comisión afirmó:

**El 13 de mayo de 1998, el Consejo de Ministros y el Parlamento de Etiopía aprobaron una resolución en que se condenó la invasión del 12 de mayo y se exigió el retiro incondicional e inmediato de las fuerzas eritreas del territorio etíope. Esta resolución no era, como ha afirmado Eritrea, una declaración de guerra.**

La Comisión también deja en claro, en el párrafo 15 de la decisión, que no había justificación para que Eritrea atacara a Etiopía aduciendo que Etiopía había violado la integridad territorial de Eritrea. A ese respecto, la Comisión afirma:

**Las zonas inicialmente invadidas por las fuerzas eritreas aquel día estaban todas incuestionablemente en el interior del territorio etíope o en el territorio que era administrado pacíficamente por Etiopía y que más tarde estaría en la parte etíope de la línea a la que las fuerzas armadas etíopes estaban obligadas a retirarse en el año 2000, de conformidad con el Acuerdo de Cesación de Hostilidades de 18 de junio de 2000.**

En su decisión, la Comisión reitera que el alcance de los daños de los que Eritrea es responsable se determinará en la etapa de evaluación de los daños de las actuaciones.

Etiopía nunca tuvo dudas de que ésa sería la conclusión a que llegarían cualesquiera terceros que tuvieran la oportunidad de examinar los hechos que desencadenaron la crisis entre Etiopía y Eritrea con cierto grado de objetividad y respeto por la realidad. Ésa fue también la conclusión a que llegó la Organización de la Unidad Africana por conducto del Comité de Embajadores que se había establecido en aquel momento. El Gobierno de Eritrea ha intentado engañar a su propio pueblo y a la comunidad internacional en relación con el origen de la crisis entre los dos países utilizando la decisión de la Comisión de Fronteras para crear confusión. Eso ya no es posible. Ningún intento de los dirigentes de Eritrea para ocultar la verdad surtirá efecto. Etiopía y Eritrea están en el punto en que están hoy debido a un hecho incontrovertible que ahora la Comisión de Reclamaciones ha dejado inequívocamente en claro. Ese hecho no es otro que la agresión fatídica, trágica y no provocada de la pacífica Etiopía por Eritrea. Esta decisión tiene una importancia considerable para la situación actual del proceso de paz entre Etiopía y Eritrea. Esta última decisión de la

Comisión de Reclamaciones establece más allá de toda duda que Eritrea no tiene absolutamente ningún motivo para reivindicar la superioridad moral en este conflicto. Eritrea fue el agresor. Eritrea violó lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, en que se establece lo siguiente:

**Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.**

Es importante señalar que, al rechazar directamente la posición jurídica de Eritrea de que la amenaza o el uso de la fuerza se justifican conforme al derecho internacional para ocupar un territorio administrado pacíficamente por otro Estado debido simplemente a una reclamación territorial, la Comisión afirma que:

**La práctica de los Estados y los escritos de eminentes publicistas muestran que la legítima defensa no puede invocarse para solucionar controversias territoriales. A este respecto, la Comisión observa que las controversias fronterizas entre Estados son tan frecuentes que cualquier excepción a la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para recuperar un territorio que está presuntamente ocupado de manera ilícita crearía una brecha grande y peligrosa en una norma fundamental del derecho internacional.**

Independientemente de la forma en que se enfoque la cuestión, no hay manera de defender la agresión no provocada que llevó a cabo Eritrea contra Etiopía entre 1998 y 2000. Eso es lo que la Comisión de Reclamaciones ha determinado en su decisión de 19 de diciembre de 2005.

Eritrea cometió una clara agresión sin ningún tipo de provocación por parte de Etiopía. Esta determinación de la Comisión de Reclamaciones no sólo disipa cualesquiera dudas que las personas puedan haber tenido en relación con la génesis de la crisis, sino que también arroja una luz valiosa sobre el carácter del desafío que aún encara el proceso de paz entre los dos países. No había justificación para la agresión eritrea en mayo de 1998. Tampoco hay justificación para lo que Eritrea está haciendo actualmente a fin de aumentar la tensión a lo largo de la frontera común y obstaculizar la solución de la crisis y la normalización de las relaciones.



Enclosure

## PARTIAL AWARD

*Jus Ad Bellum*  
Ethiopia's Claims 1-8

between

The Federal Democratic Republic of Ethiopia

and

The State of Eritrea

By the Claims Commission, composed of:  
Hans van Houtte, President  
George H. Aldrich  
John R. Crook  
James C.N. Paul  
Lucy Reed

PARTIAL AWARD – *Jus ad Bellum* – Ethiopia's Claims 1–8  
between the Claimant,  
The Federal Democratic Republic of Ethiopia, represented by:

Government of Ethiopia

Ambassador Fisseha Yimer, Permanent Representative of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the United Nations, Geneva, Co-Agent  
Mr. Habtom Abraha, Consul General, Ethiopian Mission in The Netherlands  
Mr. Ibrahim Idris, Director, Legal Affairs General Directorate, Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Addis Ababa  
Mr. Reta Alemu, First Secretary, Coordinator, Claims Team, Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Addis Ababa  
Mr. Yared Getachew, Esq., Legal Advisor; Member of the State Bar of New Jersey

Counsel and Consultants

Mr. B. Donovan Picard, Hunton & Williams LLP, Washington, D.C.; Member of the Bar of the District of Columbia; Member of the Bar of the Supreme Court of the United States  
Professor Sean D. Murphy, George Washington University School of Law, Washington, D.C.; Member of the State Bar of Maryland  
Mr. Edward B. Rowe, Hunton & Williams LLP, Washington, D.C.; Member of the Bar of the District of Columbia; Member of the State Bar of Colorado  
Ms. Virginia C. Dailey, Hunton & Williams LLP, Washington, D.C.; Member of the Bar of the District of Columbia; Member of the State Bar of Florida  
Mr. Thomas R. Snider, Hunton & Williams LLP, Washington, D.C.; Member of the Bar of the District of Columbia; Member of the State Bar of Massachusetts

and the Respondent,  
The State of Eritrea, represented by:

Government of Eritrea

His Excellency, Mohammed Suleiman Ahmed, Ambassador of the State of Eritrea to The Netherlands  
Professor Lea Brilmayer, Co-Agent for the Government of Eritrea, Legal Advisor to the Office of the President of Eritrea; Howard M. Holtzmann Professor of International Law, Yale Law School  
Ms. Lorraine Charlton, Deputy Legal Advisor to the Office of the President of Eritrea

Counsel and Advocate

Professor James R. Crawford, SC, FBA, Whewell Professor of International Law, University of Cambridge; Member of the Australian and English Bars; Member of the Institute of International Law

Counsel and Consultants

Ms. Michelle Costa  
Ms. Julie Frey  
Ms. Diane Haar, Esq.  
Ms. Amanda Costikyan Jones  
Mr. Kevin T. Reed  
Mr. Abraham Tesfay Haile, Esq.  
Ms. Lori Danielle Tully, Esq.  
Ms. Cristina Villarino Villa, Esq.

PARTIAL AWARD – *JUS AD BELLUM*  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1–8

TABLE OF CONTENTS

I.	INTRODUCTION.....	1
II.	JURISDICTION.....	1
III.	THE MERITS.....	2
IV.	AWARD.....	7
	A. Jurisdiction.....	7
	B. Findings on Liability for Violation of International Law .....	7



PARTIAL AWARD – *JUS AD BELLUM*  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1–8

I. INTRODUCTION

1. This Claim (included as a component of all of Ethiopia's Claims 1–8) has been brought to the Commission by the Claimant, the Federal Democratic Republic of Ethiopia ("Ethiopia"), pursuant to Article 5 of the Agreement between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the State of Eritrea of December 12, 2000 ("the Agreement"). The Claimant asks the Commission to find the Respondent, the State of Eritrea ("Eritrea"), liable for loss, damage and injury suffered by the Claimant, including loss, damage and injury suffered by the Claimant's nationals, as a result of the alleged use of force against the Claimant in violation of the rules of international law regulating the resort to force, the *jus ad bellum*, in May and June 1998.<sup>1</sup> The Claimant requests monetary compensation.

2. The Respondent asserts that it fully complied with international law in its resort to military operations.

II. JURISDICTION

3. Eritrea asserted that the Commission has no jurisdiction over this issue, because the Agreement, in Article 3, assigns the responsibility to address it to another body. The Commission finds that argument unpersuasive. Article 3 provides for the creation of an "independent and impartial body" to be appointed by the Secretary-General of the Organization of African Unity in consultation with the Secretary-General of the United Nations, and defines its task in the following terms:

In order to determine the origins of the conflict, an investigation will be carried out on the incidents of 6 May 1998 and on any other incident prior to that date which could have contributed to a misunderstanding between the parties regarding their common border, including the incidents of July and August 1997.

The Commission understands that the independent body authorized by Article 3 has never been constituted.

4. The terms "origins of the conflict" and "misunderstanding between the parties regarding their common border" are not the same as the legal issue posed by Ethiopia for adjudication in this Claim, that is, whether Eritrea's actions in May and June 1998 involved the unlawful resort to force against Ethiopia resulting in liability in accordance with applicable rules of international law. Determination of the origins of the conflict and the nature of any misunderstandings about the border, had they been made by the impartial body

<sup>1</sup> Both Parties utilized the terminology of *jus ad bellum* to describe the law governing the initial resort to force between them. At the hearing of this Claim in April 2005, Ethiopia confirmed that it meant by this the use of force contrary to the Charter of the United Nations, June 26, 1945, 59 Stat. p. 1031, 3 Bevans p. 1153 [hereinafter UN Charter].

PARTIAL AWARD – *JUS AD BELLUM*  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1–8

anticipated by Article 3, could have been helpful in promoting reconciliation and border delimitation, but they certainly would not have answered the question of the legality of Eritrea's resort to force. The factual inquiries called for by Article 3 were largely different from the factual determinations this Commission must make in assessing Ethiopia's claim under Article 5. Moreover, it seems clear that Article 3 was carefully drafted to direct the impartial body to inquire into matters of fact, not to make any determinations of law. This Commission is the only body assigned by the Agreement with the duty of deciding claims of liability for violations of international law.

5. Upon first reading, the last sentence of Article 5 of the Agreement might well be thought to exclude the Commission's jurisdiction over rules of international law regulating the resort to force. That sentence provides that "[t]he Commission shall not hear claims arising from the cost of military operations, preparing for military operations, *or the use of force*, except to the extent that such claims involve violations of international humanitarian law" (emphasis added). However, at an early stage of the proceedings, the Parties agreed upon an interpretation of that sentence limiting it to claims solely for the costs of the enumerated activities, and the Commission agreed to respect that interpretation. That agreed interpretation was recorded in point 5 of the Commission's letter to the Parties of July 24, 2001.<sup>2</sup> Consequently, the Commission has jurisdiction pursuant to Article 5 over Ethiopia's *jus ad bellum* Claim.

### III. THE MERITS

6. Ethiopia claimed that Eritrea carried out a series of unlawful armed attacks against it, beginning on May 12, 1998, in violation of the *jus ad bellum*, and made this an element of all eight of the Claims it submitted to the Commission.<sup>3</sup> The Commission, in ordering filing schedules, decided to hear that Claim along with Ethiopia's Claims concerning alleged violations of applicable international law, including the *jus in bello*, in the Western and Eastern Fronts (Ethiopia's Claims 1 and 3). Consequently, this Claim was heard in the Commission's April 11–15, 2005 hearings on liability.

7. The Commission informed the Parties on August 29, 2001 that it intended to conduct proceedings in Government-to-Government claims in two stages, first concerning liability, and second, if liability is found, concerning damages. Ethiopia filed its Statement of Claim on December 12, 2001, Eritrea's Statement of Defense was filed on December 16, 2002,

<sup>2</sup> Point 5 of the Commission's July 24, 2001 letter to the Parties states:

The Commission notes the agreement of the Parties that the last sentence of Article 5, paragraph 1 of the Agreement of 12 December 2000, despite its wording, was intended to mean that claims of compensation for all costs of military operations, all costs of preparing for military operations, and all costs of the use of force are excluded from the jurisdiction of the Commission, without exception. Consequently, the Commission shall respect that interpretation of the provision.

<sup>3</sup> See, e.g., Partial Award, Central Front, Ethiopia's Claim 2 Between the the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the State of Eritrea (April 28, 2004), para. 4 [hereinafter Partial Award in Ethiopia's Central Front Claims].

PARTIAL AWARD – *JUS AD BELLUM*  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1–8

Ethiopia's Memorial on November 1, 2004, Eritrea's Counter-Memorial on January 17, 2005, and Ethiopia's Reply on March 10, 2005.

8. In essence, Ethiopia contended that Eritrea planned and carried out these attacks against Ethiopia in violation of its obligations under international law, including notably the requirement of Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations ("UN Charter") that all Members refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State. Ethiopia alleged that, between May 12 and June 11, 1998, Eritrea launched a "full scale" invasion of Ethiopia at many points along their mutual border from Badme in the west to Bure in the east.

9. In addition to its jurisdictional objections, dealt with above, Eritrea denied Ethiopia's allegations on the merits. In its written pleadings, Eritrea made the following three main defensive assertions: (a) that Ethiopia was unlawfully occupying Eritrean territory in the area around Badme, which was the area of much of the initial hostilities in May 1998, citing the decision of the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission of April 13, 2002;<sup>4</sup> (b) that Ethiopian armed militia near Badme carried out forcible incursions into Eritrea in early May 1998 and fired on Eritrean forces on May 6 and 7, killing eight Eritrean soldiers and setting off fighting between small units in the area during the next several days; and (c) that it was Ethiopia that declared war on Eritrea on May 13, 1998. On the last day of the hearing, Eritrea argued that its actions in taking Badme and adjacent areas on May 12, 1998 were lawful measures of self-defense, consistent with Article 51 of the UN Charter, taken in response to the fighting near Badme that began on May 6 and 7, 1998. While Eritrea asserted that these incidents occurred within Eritrean territory, Ethiopia asserted that they occurred within Ethiopian territory.

10. The Commission cannot accept the legal position that seems to underlie the first of these Eritrean contentions – that recourse to force by Eritrea would have been lawful because some of the territory concerned was territory to which Eritrea had a valid claim. It is true that the boundary between Eritrea and Ethiopia in the area of Badme was never marked in the years when Eritrea was an Italian colony, during Eritrea's subsequent incorporation into Ethiopia, or after Eritrean independence in 1993, and it is clear that the Parties had differing conceptions of the boundary's location. However, the practice of States and the writings of eminent publicists show that self-defense cannot be invoked to settle territorial disputes.<sup>5</sup> In

<sup>4</sup> Decision Regarding Delimitation of the Border between the State of Eritrea and the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Eritrea-Ethiopia Boundary Commission, April 13, 2002, *reprinted in* 41 I.L.M. p. 1057 (2002).

<sup>5</sup> See, e.g., Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations (the "Friendly Relations Declaration"), UN General Assembly Resolution 2625 (XXV) of Oct. 24, 1970, G.A. Res. 2625, U.N. GAOR, 25th Sess., Supp. No. 28, U.N. Doc. A/8028, *reprinted in* 9 I.L.M. p. 1292 (1970) ("[E]very State has the duty to refrain from the threat or use of force . . . as a means of solving international disputes, including territorial disputes"); GAETANO ARANGIO-RUIZ, *THE UNITED NATIONS DECLARATION ON FRIENDLY RELATIONS AND THE SYSTEM OF THE SOURCES OF INTERNATIONAL LAW* pp. 104–105 (Sijthoff & Noordhoff 1979); ALFRED VERDROSS & BRUNO SIMMA, *UNIVERSELLES VÖLKERRECHT* p. 905 (Duncker und Humblot 1984); Michel Virally, *Article 2:*

PARTIAL AWARD – *JUS AD BELLUM*  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1–8

that connection, the Commission notes that border disputes between States are so frequent that any exception to the prohibition of the threat or use of force for territory that is allegedly occupied unlawfully would create a large and dangerous hole in a fundamental rule of international law.

11. The Commission turns next to Eritrea's second line of argument. In general, recourse to the use of armed force by one State against another is unlawful unless it is used in self-defense or occurs with the sanction of the Security Council pursuant to Chapter VII of the UN Charter.<sup>6</sup> As the text of Article 51 of the Charter makes clear, the predicate for a valid claim of self-defense under the Charter is that the party resorting to force has been subjected to an armed attack. Localized border encounters between small infantry units, even those involving the loss of life, do not constitute an armed attack for purposes of the Charter. In that connection, the Commission notes that Eritrea did not report its use of armed force against Ethiopia on May 12, 1998 to the Security Council as measures taken in self-defense, as it would be obligated to do by Article 51 of the Charter in case of self-defense against armed attack.

12. With respect to the events in the vicinity of Badme that occurred during the period from May 6–12, 1998, the Commission takes note of the sharply different accounts offered by the Parties as to the precise location of the incidents of May 6 and 7 and of the numbers and types of forces involved. It need not resolve these differences, because it is clear from the evidence that these incidents involved geographically limited clashes between small Eritrean and Ethiopian patrols along a remote, unmarked, and disputed border. The Commission is satisfied that these relatively minor incidents were not of a magnitude to constitute an armed attack by either State against the other within the meaning of Article 51 of the UN Charter.

13. The Parties agreed that a joint body met in Addis Ababa on May 8, 1998 to discuss border problems.<sup>7</sup> Ethiopia asserted, and Eritrea did not dispute, that the head of the Eritrean delegation to that meeting was its Minister of Defense and that, following the meeting on May 8, its delegation left Addis Ababa during the night. Ethiopia asserted that it had expected the meeting to continue on May 9 and that it was surprised by the departure of the Eritrean delegation. Eritrea asserted in response that its delegation left because the meeting had concluded. Ethiopia also asserted that the meeting had been cordial and that agreement had

---

*Paragraphe 4, in LA CHARTE DES NATIONS UNIES* pp. 119–125 (Economica, 2d ed. 1991); OSCAR SCHACHTER, *INTERNATIONAL LAW IN THEORY AND PRACTICE* p. 116 (Nijhoff 1991); PETER MALANCZUK, *AKHURST'S MODERN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW* pp. 314–315 (Routledge, 7th rev. ed. 1997).

<sup>6</sup> See, e.g., UN Charter, *supra* note 1, arts. 2(4), 24, 39–42; IAN BROWNLIE, *PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW* pp. 699–700 (Oxford University Press, 6th ed. 2003); ANTONIO CASSESE, *INTERNATIONAL LAW* pp. 296–298, 305–307 (Oxford University Press 2001); Albrecht Randelzhofer, *Article 2(4)*, in *THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS: A COMMENTARY* pp. 111–118 (Bruno Simma ed., Oxford University Press 1994).

<sup>7</sup> The Parties disagreed regarding the nature of this body. Ethiopia contended that the Parties established a formal commission to address questions relating to the boundary. Eritrea characterized it in less formal terms. In any case, the Parties were engaged in a process of consultations regarding questions related to the boundary before hostilities began.

PARTIAL AWARD – *JUS AD BELLUM*  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1–8

been reached that both sides should avoid border crossings by armed personnel and that the two sides would meet again in two months in Asmara to seek agreement on border issues. Eritrea did not respond in the present proceedings to those assertions.<sup>8</sup>

14. The evidence showed that, at about 5:30 a.m. on May 12, 1998, Eritrean armed forces, comprised of at least two brigades of regular soldiers, supported by tanks and artillery, attacked the town of Badme and several other border areas in Ethiopia's Tahtay Adiabo Wereda, as well as at least two places in its neighboring Laelay Adiabo Wereda. On that day and in the days immediately following, Eritrean armed forces then pushed across the flat Badme plain to higher ground in the east. Although the evidence regarding the nature of Ethiopian armed forces in the area conflicted, the weight of the evidence indicated that the Ethiopian defenders were composed merely of militia and some police, who were quickly forced to retreat by the invading Eritrean forces. Given the absence of an armed attack against Eritrea, the attack that began on May 12 cannot be justified as lawful self-defense under the UN Charter.

15. The areas initially invaded by Eritrean forces on that day were all either within undisputed Ethiopian territory or within territory that was peacefully administered by Ethiopia and that later would be on the Ethiopian side of the line to which Ethiopian armed forces were obligated to withdraw in 2000 under the Cease-Fire Agreement of June 18, 2000. In its Partial Award in Ethiopia's Central Front Claims, the Commission held that the best available evidence of the areas effectively administered by Ethiopia in early May 1998 is that line to which they were obligated to withdraw in 2000.<sup>9</sup> In the same Partial Award, the Commission explained why it must hold Eritrea liable for violations of international humanitarian law committed by it within such territory and why such holdings concerning conduct during the war have no effect on the international boundary as subsequently determined by the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission.<sup>10</sup> The same principle governs application of the *jus ad bellum*.

16. Consequently, the Commission holds that Eritrea violated Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations by resorting to armed force to attack and occupy Badme, then under peaceful administration by Ethiopia, as well as other territory in the Tahtay Adiabo and Laelay Adiabo Weredas of Ethiopia, in an attack that began on May 12, 1998, and is liable to compensate Ethiopia, for the damages caused by that violation of international law.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> The evidence included references to other high-level contacts and conversations between the Parties in the days prior to May 12, 1998, as well as suggestions of military preparations on both sides of the boundary during this period. However, these matters were not clarified during the proceedings, and the Commission is constrained to act on the basis of the record available to it.

<sup>9</sup> Partial Award in Ethiopia's Central Front Claims, *supra* note 3, para. 31.

<sup>10</sup> *Id.* at paras. 27–31.

<sup>11</sup> In addition to the UN Charter, Ethiopia contended that Eritrea's actions also violated the Charter of the Organization of African Unity, May 25, 1963, 479 U.N.T.S. p. 39 [hereinafter OAU Charter], as well as several bilateral agreements and customary international law. While the OAU Charter articulates important principles,

PARTIAL AWARD – *JUS AD BELLUM*  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1–8

17. This leaves Eritrea's third line of argument, based on Ethiopia's alleged declaration of war. On May 13, 1998, the Ethiopian Council of Ministers and Parliament passed a resolution that condemned the May 12 invasion and demanded the unconditional and immediate withdrawal of Eritrean forces from Ethiopian territory. This resolution was not, as Eritrea has asserted, a declaration of war. In international law, the essence of a declaration of war is an explicit affirmation of the existence of a state of war between belligerents.<sup>12</sup> Nevertheless, the resolution made clear that Ethiopia would not accept Eritrea's advances as a *fait accompli* and was determined to act in self-defense until the Eritrean forces withdrew or were compelled to leave the areas they had occupied. Ethiopia so notified the United Nations Security Council, pursuant to Article 51 of the UN Charter. Moreover, the Commission notes that the Parties subsequently maintained diplomatic relations and some economic relations, both of which would appear inconsistent with a formal declaration of war.

18. Ethiopia also contended that the unlawful armed attack by Eritrea that began on May 12 included all of Eritrea's subsequent attacks in May and June 1998 into Ethiopian territory along other parts of the border between the two States, as it considered those attacks to be a continuous second phase of a "30-day offensive" by Eritrea. It alleged that those attacks occurred across the Mareb River and at Zalambessa on the Central Front and at Adi Murug and Bure on the Eastern Front. In essence, Ethiopia contended that Eritrea carried out a program of pre-planned and coordinated armed attacks in multiple locations in violation of international law. This contention, however, has not been proved.

19. The evidence indicated that Eritrea's armed forces were more fully mobilized than those of Ethiopia and thus had the initiative in the first several months of the war, but that does not prove that Eritrea's actions, other than those in the areas of what became known as the Western Front addressed in this Partial Award, were predetermined. Based on the evidence before it, the Commission cannot resolve whether the Eritrean military operations from mid-May to mid-June 1998 in what became the Central and Eastern Fronts were pre-planned attacks, as Ethiopia contends, or were determined by developing military demands as both Parties sought to control key corridors of attack and defense after it became clear that Ethiopia would not acquiesce in Eritrea's captures of territory on the Western Front. What is clear is that, once the armed attack in the Badme area occurred and Ethiopia decided to act in self-defense, a war resulted that proved impossible to restrict to the areas where that initial attack was made.

20. In view of these holdings establishing Eritrea's liability for the unlawful armed attack on the Western Front that began on May 12, 1998, the Commission will request further briefing in the damages phase concerning the scope of the damages for which Eritrea is liable

---

because of the fundamental role of the UN Charter in relation to the issues presented, this Partial Award does not consider these additional claims in detail.

<sup>12</sup> See Hague Convention (III) Relative to the Opening of Hostilities, Oct. 18, 1907, 36 Stat. p. 2259, 1 Bevans p. 619.

PARTIAL AWARD – *JUS AD BELLUM*  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1–8

by reason of that attack, in addition to those damages following from the Commission's other Partial Awards.

IV. AWARD

In view of the foregoing, the Commission determines as follows:

A. Jurisdiction

1. The Commission has jurisdiction over the Claimant's *jus ad bellum* Claim.

B. Findings on Liability for Violation of International Law

1. The Respondent violated Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations by resorting to armed force on May 12, 1998 and the immediately following days to attack and occupy the town of Badme, then under peaceful administration by the Claimant, as well as other territory in the Claimant's Tahtay Adiabo and Laēlay Adiabo Weredas.

2. The Claimant's contention that subsequent attacks by the Respondent along other parts of their common border were pre-planned and coordinated unlawful uses of force fails for lack of proof.

3. The scope of damages for which the Respondent is liable because of its violation of the *jus ad bellum* will be determined in the damages phase of these proceedings.

[Remainder of page purposely left blank.]

PARTIAL AWARD – JUS AD BELLUM  
ETHIOPIA'S CLAIMS 1-8

Done at The Hague, this 19<sup>th</sup> day of December 2005

H. Houtte

President Hans van Houtte

George H. Aldrich

George H. Aldrich

John R. Crook

John R. Crook

James C.N. Paul

James C.N. Paul

Lucy Reed

Lucy Reed